**PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA**
P r e s e n t e

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, **iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su párrafo primero, modifica su fracción IV y adiciona una nueva fracción V, recorriéndose en su orden la actual fracción V que pasa a ser fracción VI, al tenor de la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En atención a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país se encuentra constituido como una República Federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución nacional.

El pueblo ejerce su soberanía por medios de la Poderes de la Unión, esto es, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún momento podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución particular de cada uno de ellos. Es por eso que en las constituciones de los estados se establece con autonomía la forma en cómo debe regularse el proceso legislativo para la creación o modificación de las leyes locales.

La creación o modificación de las leyes se encuentra regulada a través de un proceso deliberativo y formal que se conoce como *proceso legislativo*. Dicho proceso en nuestro país, tanto en el orden federal como en las entidades federativas, se define como un conjunto de etapas sistematizadas y concatenadas entre sí que deben ser observadas por los poderes legislativos y ejecutivo que comienzan hasta concluir con una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y con la iniciación de la vigencia de la norma; etapas que tienen como finalidad incorporar al sistema jurídico nuevas leyes o, en su caso, modificar o sustituir las existentes.

El *proceso legislativo* se encuentra plasmado en la Constitución Federal y la particular de los estados de la República y se encuentra regulado para el caso de

estos por las constituciones locales y las respectivas leyes orgánicas de los poderes legislativos. Es lo que se conoce como las “*normas sobre producción de normas*” y son las que establecen aspectos como quienes son los sujetos u órganos legitimados para presentar las iniciativas, la forma en cómo deben estructurarse, el turno a comisiones, plazos para la presentación de los dictámenes, deliberaciones en el pleno, reglas de votación para su aprobación, ejercicio del derecho de veto, etc.

El texto vigente del artículo 37 de la Constitución del Estado de Colima establece que el derecho a iniciar leyes corresponde: a los diputados locales, el gobernador, el supremo tribunal de justicia en asuntos del ramo de justicia, a los ayuntamientos y a los ciudadanos colimenses mediante iniciativa popular presentada en los términos fijados por la propia constitución local y la ley respectiva.^[1]

El derecho de iniciar leyes (también decretos) ante el órgano legislativo local suele variar según cada estado de la República. En términos generales se reconoce a los mismos sujetos que la constitución de Colima refiere. Sin embargo muchas entidades federativas han ampliado este derecho a otros órganos e instituciones autónomas a efecto de dinamizar y fortalecer la actividad legislativa, lo cual es válido y aceptado por la Constitución Federal.

Así por ejemplo, la constitución del estado de Coahuila en su artículo 59 extiende el derecho de iniciativa “a los organismos públicos autónomos, en todo lo concerniente a su competencia. En este caso, la iniciativa se presentará por conducto del Presidente del organismo previo acuerdo del Consejo General.”

La constitución del estado de Tlaxcala en su artículo 46 hace el mismo reconocimiento “a los titulares de los órganos públicos autónomos.” El artículo 18 de la constitución estado de Querétaro igualmente contempla “a los organismos autónomos.”

El artículo 34 de la constitución de Veracruz reconoce derecho de iniciativa “a los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia de su competencia.” En similares términos se pronuncia el artículo 50 de la constitución del estado de Oaxaca, que también los acepta como sujetos legitimados para hacer planteamientos legislativos ante su respectivo congreso local.

Como podrá advertirse son diversas las constituciones locales de otras entidades federativas que le reconocen a los llamados *órganos autónomos* el derecho de iniciar leyes o decretos ante su propia Legislatura Estatal.

La Universidad de Colima es sin lugar a dudas un órgano autónomo de naturaleza relevante y especial al amparo del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, que dotó de autonomía a las universidades e instituciones de educación superior de todo el país.

La Universidad de Colima se encuentra definida por el artículo 101 de la Constitución de nuestro estado como “un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que con pleno derecho a su autonomía tiene por fines impartir la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado; fomentar la investigación científica y social, principalmente en relación con los problemas estatales y nacionales y extender con la mayor amplitud, los beneficios de la cultura, con irrestricto respeto a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas.”

Siendo la institución pública de educación superior más importante de nuestra entidad, se estima conveniente que la Universidad de Colima cuente con el derecho de iniciar leyes o decretos ante el H. Congreso del Estado en todo lo concerniente a su esfera de competencia, pues realiza importantes funciones en beneficio de la sociedad (*v. gr.* educar, investigar y difundir la cultura) y en razón de esas materias que atiende es pertinente que tenga la posibilidad de acudir ante el órgano legislativo local a plantear el mejoramiento, adecuación y actualización de las leyes relacionadas a su ámbito competencial, pues ello fortalece el Estado de Derecho y contribuye al desarrollo social de nuestra entidad, situación que ya se reconoce en el derecho comparado el extenderse esta prerrogativa a los llamados órganos constitucionales autónomos.

El ampliar los sujetos con derecho de iniciativa no constriñe al Congreso del Estado a aprobar en idénticos términos las iniciativas de ley o reforma que se le presenten por parte de sus proponentes, en este caso de órganos autónomos como la Universidad de Colima, pues el Congreso conserva como es evidente su potestad soberana de analizar, discutir, adecuar y modificar los planteamientos que se le formulen para crear o modificar las normas que componen el marco jurídico del estado.

En todo caso el ampliar este derecho a favor de instituciones autónomas como las universidades lo que viene es a fortalecer la dinámica del trabajo legislativo, lo cual siempre es útil para la sociedad, pues permite contar con leyes actualizadas, sobre todo si se permite a quienes tienen un interés directo en ellas poder hacer planteamientos para su adecuación y mejora.

La Universidad de Colima en su calidad de máxima institución pública de educación superior en el estado, y de acuerdo a los fines que persigue^[2], tiene una muy relevante vinculación con muchas leyes del estado, respecto de las cuales mantiene un interés legítimo en cuanto a su cumplimiento, regularidad y vigencia.

Para empezar la Universidad de Colima y la llamada comunidad universitaria que se encuentra integrada por académicos, funcionarios, trabajadores, estudiantes y egresados cuentan con una norma fundamental que es su Ley Orgánica, garante de su autonomía, personalidad jurídica, patrimonio y del funcionamiento de sus principales órganos de gobierno interno.

El artículo 2 de su Ley Orgánica así lo reconoce al señalar que: “se otorga a la Universidad de Colima el derecho de autonomía, para que pueda realizar sus fines con la más amplia libertad y organizar su propio gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por esta Ley, en su Reglamento y demás disposiciones legales que acuerde el Consejo Universitario y autoridades competentes.”

De tal forma, la Ley Orgánica de la Universidad de Colima es ante todo y en primer lugar una ley para los universitarios, razón por la cual convendría dotar a la Universidad del derecho de iniciativa legislativa para cuando su comunidad lo decida, en los tiempos y formas que consideren convenientes, tengan la posibilidad de plantear ante el Congreso del Estado las reformas o adiciones que se estimen pertinentes a su propia Ley Orgánica.

Pero adicionalmente a lo anterior, Ley Orgánica de la Universidad de Colima no es la única norma estatal con la que la propia Universidad y su comunidad universitaria mantiene un nivel de relación y vinculación significativa. Existen muchas leyes estatales que involucran en mayor o menor medida a la Universidad de Colima y que le dan participación para el cumplimiento de sus objetivos y fines, en su respectivo ámbito de competencia, tal es el caso de las siguientes leyes locales:

- Ley de Educación,
- Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física,
- Ley de Fomento de Cultura Cívica,
- Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología,
- Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento,
- Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro,
- Ley de Profesiones del Estado de Colima, entre otras.

Dichas leyes están relacionadas de alguna u otra forma a la materia competencia de la Universidad de Colima, que es educar, investigar y difundir la cultura, por lo que respecto de ello también sería adecuado que se confiriera a la Universidad el derecho de poder presentar iniciativas ante el Congreso del Estado para que el órgano legislativo estudie, dictamine y resuelva la posibilidad de adecuar y mejorar este tipo de normas, si así fuere el caso, lo cual redundaría en beneficio de los ciudadanos. Situación que justifica plenamente los alcances de esta iniciativa de reforma a la Constitución del Estado.

Dichas leyes están relacionadas de alguna u otra forma a la materia competencia de la Universidad de Colima, que es educar, investigar y difundir la cultura, por lo que respecto de ello también sería adecuado que se confiriera a la Universidad el derecho de poder presentar iniciativas ante el Congreso del Estado para que el órgano legislativo estudie, dictamine y resuelva la posibilidad de adecuar y mejorar este tipo de normas, si así fuere el caso, lo cual redundaría en beneficio de los ciudadanos. Situación que justifica plenamente los alcances de esta iniciativa de reforma a la Constitución del Estado.

Así, se propone sustancialmente reconocer en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que el derecho de iniciar leyes o decretos ante el H. Congreso del Estado también compete a la Universidad de Colima, en todo lo concerniente a su ámbito de competencia.

En este caso la iniciativa se presentará por conducto de su Rector, quien es el representante legal de la Universidad, previo acuerdo del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de carácter representativo dentro de la institución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, una vez tramitado el procedimiento de reformas a la Constitución del Estado previsto por el artículo 130 de la misma, se propone adoptar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su párrafo primero, se modifica su fracción IV y se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose en su orden la actual fracción V que pasa a ser fracción VI, para quedar como sigue:

“Artículo 37.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I a III.- [...]

IV.- A los Ayuntamientos;

V.- A la Universidad de Colima, en todo lo concerniente a su ámbito de competencia. En este caso la iniciativa se presentará por conducto de su Rector, previo acuerdo del Consejo Universitario; y

VI.- A los ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante iniciativa popular presentada en forma, suscrita por un número que sea cuando menos el 2% de los inscritos en el listado nominal de electores. Las iniciativas presentadas conforme a esta fracción, deberán ser dictaminadas en el siguiente período ordinario de sesiones a aquel en que se reciba. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva.”

TRANSITORIOS:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.